

Haití: la enésima crisis electoral

Arnold Antonin: economista y cineasta haitiano; profesor de la Universidad del Estado de Haití; fundador y director del Centro Petión-Bolívar de Haití.

Una de las más agudas e inextricables crisis que sacuden a América Latina es la haitiana. Su origen es electoral y, si tomamos en cuenta la palabra de muchos analistas, su solución son las elecciones. Efectivamente, en este país está presente la única misión de paz de las Naciones Unidas en América Latina, la Minustah, que tenía como objetivo establecer el clima de seguridad necesario para que se realizaran las elecciones antes del 31 de diciembre de 2005.

Aunque se formó un gobierno provisional con los mismos objetivos, el año 2005 pasó y no se realizaron todavía las elecciones, ni se creó el ambiente de seguridad necesario. Un día después de lo que pareció un ultimátum del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno fijó el 7 de febrero (día en que debía asumir el cargo el nuevo presidente) como la fecha para que se celebre el primer turno de las elecciones presidenciales y legislativas.

¿Permitirán estas elecciones salir de la transitoriedad e institucionalizar la democracia en Haití?

El origen de la crisis

Desde las primeras elecciones realizadas luego del regreso de Jean-Bertrand Aristide de su exilio, comenzaron a impugnarse los procesos electorales. El que ganó René Preval en 1996 fue objetado con el argumento de que hubo solo un 15% de participación de la población. Las elecciones de 2000, en las que fue reelecto Aristide, fueron igualmente cuestionadas junto con su legitimidad, ya que en este caso contaron con apenas un 5% de participación popular.

Pero si bien algunos políticos subrayaban la falta de legitimidad de los presidentes elegidos con niveles tan bajos de participación electoral, el factor que originó la crisis actual y proveyó una base de legitimidad a la oposición a Aristide fue el fraude constatado en las elecciones parlamentarias, realizadas también en 2000, y

en las que Famille Lavalasse, el partido liderado por el presidente Aristide, obtuvo el 100% de los escaños del Parlamento. Desde entonces, comenzaron sucesivas rondas de negociación bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no obtuvieron resultados ni consiguieron que se firmara acuerdo alguno. En estas condiciones, Aristide intentó obtener el control total de las instituciones del país: gobierno (Primer Ministro) y Parlamento. Sin embargo, fue precisamente éste el comienzo de la pendiente que concluyó con su caída, en febrero de 2004, luego de que llevara la inseguridad en las calles al paroxismo a través de bandas armadas que buscaban aterrorizar y controlar a la sociedad civil que se le oponía.

El 29 de febrero de 2004 Aristide debió renunciar bajo fuertes presiones de un inmenso movimiento popular y pacífico y las amenazas de una banda armada disidente, el «Ejército Caníbal», que se alió con grupos integrados por ex militares. Luego de su partida, se formó un gobierno de transición con el objetivo de restablecer la seguridad perdida durante el régimen anterior y organizar elecciones –libres y creíbles– que desembocaran en un nuevo gobierno legítimo dentro de un período de 18 meses (en diciembre de 2005), de manera que el nuevo Presidente pudiera asumir sus funciones el 7 de febrero, fecha fetiche de la caída de la dictadura de los Duvalier y establecida en la Constitución, vigente desde 1987, para el traspaso del poder.

Las elecciones de 2005

El 11 de febrero de 2005, el presidente provisional de la República, Boniface Alexandre, publicó el decreto electoral que ordenó la organización de las elecciones. Allí se fijaron como fechas el 9 de octubre (para las municipales), el 13 de noviembre (para la primera vuelta de las presidenciales y las legislativas) y el 18 de diciembre para la segunda vuelta. El 25 de abril, el Consejo Electoral lanzó oficialmente el proceso de inscripción de los electores.

Pero el calendario establecido comenzó a alterarse rápidamente. El 22 de agosto de 2005, de acuerdo con los representantes de los partidos políticos, se pospuso por primera vez la fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias para el 26 de noviembre de 2005. Al mismo tiempo, comenzó a prolongarse el plazo de inscripción de los electores potenciales indicados por el Instituto Haitiano de Estadística. A pesar de todas las dificultades, se inscribieron 3.530.433 electores. El 17 de noviembre de 2005, el jefe de gabinete del presidente anunció que la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas se posponía (por segunda vez)

para el 27 de diciembre de 2005. Ocho días más tarde, se anunció un tercer cambio para el 8 de enero de 2006. Cinco días antes de las elecciones, el Consejo Electoral anunció un nuevo retraso.

Este caos electoral se explica fundamentalmente por problemas de disidencia dentro del mismo Consejo Electoral y por la falta de coordinación entre el Consejo Electoral, el gobierno, la misión de la ONU y la OEA, que derivaron en una serie de problemas técnicos, principalmente por la distribución de las cartas de identificación de los electores y la escasez y mala localización de los centros de votación. En este contexto, los responsables de las diferentes instituciones, nacionales e internacionales, se atribuyeron mutuamente la responsabilidad por estas fallas.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA formularon, por separado, declaraciones que coincidieron en reclamar que las elecciones se realizaran a más tardar el 7 de febrero de 2006. Al día siguiente, el gobierno haitiano fijó ese día como la fecha para las elecciones, sin que el Consejo Electoral se hubiera pronunciado.

Ahora bien, aunque se resuelvan las dificultades técnicas y las elecciones se lleven a cabo, la mayoría de los problemas permanecen intactos, ya que el gobierno provisional no ha podido resolverlos.

Los desafíos de un gobierno elegido legítimamente

El nuevo gobierno hereda un país similar al que dejó Aristide, o aún peor. Será este nuevo gobierno el encargado de llevar adelante la transición a la democracia y recrear, desde sus bases, las instituciones del Estado haitiano, completamente destruido. Entre ellas, una de las más importantes es un Consejo Electoral que funcione de manera permanente y que permita avanzar en una institucionalización de la democracia.

Desde la caída de Jean-Claude Duvalier en 1986, se han creado 12 consejos electorales provisionales, de los cuales siete se formaron luego del regreso de Aristide de su exilio, en 1994. Sobre todo desde la renuncia de Duvalier, cada vez que hay elecciones o que se acerca una perspectiva de recambio de poder en Haití,

el país entra en crisis. Los que gobiernan no quieren dejar el poder y, por lo general, se inclinan por una de dos alternativas: se rehúsan a convocar a elecciones, o utilizan el aparato de Estado para realizarlas de manera fraudulenta. Paralelamente, quienes se encuentran lejos del poder, debido a esta misma ilegitimidad y a las acciones dictatoriales del gobierno en función, se niegan a esperar el fin del mandato. La situación de los últimos 19 años podría llevar a la conclusión de que las elecciones no son sino una fuente de crisis, y que cada proceso electoral es, en general, un periodo de gran inseguridad.

Desde la independencia y hasta la promulgación de la Constitución de 1987, las elecciones eran de segundo grado, por lo que las intrigas y las maniobras se manejaban entre el Parlamento, el Palacio Nacional, el Ejército y el gobierno de Estados Unidos luego de la ocupación militar de 1915. En la actual situación, entran en juego otros actores: el gobierno, la Policía (ya no existe más el Ejército), la población en general, la sociedad civil organizada, los partidos políticos y la comunidad internacional. Esta última tiene un rol mucho más relevante, ya que la crisis se ha internacionalizado desde el regreso de Aristide en 1994 gracias a la intervención de 20.000 *marines* estadounidenses. En este cuadro, hay también otra figura muy importante: el Consejo Electoral Provisional. Aunque debería ser el árbitro imparcial de la contienda, hasta ahora ha sufrido en cada una de sus formaciones todas las dificultades que han atravesado las elecciones.

En cuanto al Consejo Electoral Permanente, que según la Constitución debería haber sido formado inmediatamente después de las elecciones de 1987 y renovado cada 10 años, hasta ahora no existe. En efecto, para definir a algunos de sus miembros se requiere de las Asambleas Territoriales, que nunca han llegado a conformarse. Este Consejo Electoral Permanente debería constituir un símbolo de la institucionalización democrática y de la voluntad de respetar una verdadera alternancia en el poder. El hecho de que no exista es una prueba de que la situación no ha cambiado y de que la política sigue consistiendo en controlar indefinidamente el gobierno, o llamar a elecciones que crean crisis permanentes, como en el caso actual. En este sentido, es imperativo que se realicen las elecciones locales que permitan instalar las Asambleas Territoriales y, a partir de allí, constituir el Consejo Electoral Permanente.

Otro tema relevante es el de la seguridad. El 30 de septiembre de 2004, las bandas armadas teledirigidas por Aristide desde el exilio lanzaron una ola de acciones terroristas, llamada por ellos mismos «Operación Bagdad»: se trata de un

terrorismo de tipo «tropical», diferente en sus características del de tipo «islámico», dirigido contra la población civil de la parte baja de Puerto Príncipe. Desde entonces, con breves periodos de calma relativa, la violencia no ha cesado.

Por esta razón, Aristide ha logrado aparentemente cumplir algunos de los principales objetivos en su ofensiva a través de grupos armados: el agravamiento de la ruina económica del país, al impedir la normalización de las actividades comerciales y de producción; la parálisis de las actividades y de los servicios; el miedo generalizado, que dificulta las elecciones y la normalización de la vida política; y el aniquilamiento progresivo de la policía.

Una de las armas más eficaces de esta forma de terrorismo es el secuestro de personas de todas las clases sociales, en muchos casos su tortura y violación, y en algunos casos incluso la muerte. En julio, se llegó a un punto culminante con el secuestro, la tortura salvaje y el asesinato del poeta y periodista Jacques Roche, que despertó una ola de indignación unánime en la sociedad. En aquel momento, la misión de la ONU –Minustah– y la Policía reaccionaron y aseguraron la tranquilidad durante unos tres meses. Pero a fin de año, cuando se aproximaba la fecha de las elecciones, los secuestros volvieron a aumentar y llegaron a unos centenares en diciembre.

Para combatir la inseguridad, debería contarse con una Policía sólidamente formada y una Justicia fiable, otro de los problemas por resolver. Con solo 4.000 hombres para todo el territorio, con armas viejas, infiltrado desde la época de Aristide, afectado por la corrupción y el tráfico de drogas, con 150 policías asesinados por la violencia callejera, es muy poco lo que puede hacer el actual aparato policial para detener la ola de violencia. Su primer jefe durante el gobierno de transición, León Charles, no logró resultado alguno. Fue sustituido por Mario Andresol, ex comisario de policía, exiliado durante el gobierno de Aristide, que llegó a su puesto con mucho entusiasmo, logró una mejor concertación con la Minustah y ejecutó algunas acciones que frenaron la violencia entre agosto y octubre, aunque a finales de año la policía volvió a su inacción y los bandidos recuperaron el terreno perdido. Solo la zona de Belair pudo ser liberada de las bandas armadas: el resto de la ciudad, Cité Soleil y La Saline, los principales barrios marginales, siguen dominados por las bandas, que tienen a la población bajo su control.

La justicia es otro desafío importante. Según las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos, si bien no hay atropellos directos del Estado, nada ha cambiado en la Justicia. Los jueces corruptos siguen liberando a los delincuentes que arresta la Policía, quienes disponen de fuertes sumas de dinero gracias a los secuestros. Un ejemplo es el de un grupo de jueces de la Corte de Casación (institución equivalente a la Corte Suprema de Justicia), que fueron acusados de corrupción y forzados a jubilarse debido a una sentencia en favor de un candidato a la presidencia de nacionalidad estadounidense, en un hecho que ha creado todavía más confusión sobre la independencia de los poderes en Haití.

Conclusión: la misión de paz, las elecciones y el futuro de Haití

Con 8.000 hombres bien armados y 1.000 millones de dólares gastados, la Minustah no ha logrado crear la estabilización necesaria para avanzar en la normalización de la vida del país. En dos ocasiones, bajo fuertes protestas y presiones de la sociedad civil frente a la desmesurada ola de violencia desatada por las bandas armadas, los militares bajo el mando de la ONU realizaron acciones concretas de control. Desarmaron a grupos de ex militares y arrestaron a algunos jefes de las bandas que aterrorizaban a la población de la capital. Sin embargo, estas acciones no tuvieron continuidad y las bandas volvieron a formarse, esta vez con más fuerza, aumentando sus ataques y su crueldad, sobre todo en forma de secuestros masivos, lo que se ha convertido en una especie de industria.

A raíz de esta situación, a principios de enero de 2006 se levantó una fuerte ola de protestas de todos los sectores de la sociedad haitiana contra la pasividad y la complacencia de la Minustah. Como señal de la confusión que reina en el seno de este cuerpo, su jefe militar máximo, el general brasileño Bacellar Urano Texeira Da Matta, llegado a Haití en septiembre de 2005, fue encontrado muerto en su cuarto de hotel, se supone que por suicidio.

Sin embargo, a pesar de los errores y limitaciones, está claro que el gobierno legítimamente elegido deberá apoyarse en la misión de la ONU mientras reestructura una nueva Policía o un nuevo Ejército, como algunos candidatos proponen, para garantizar un mínimo de estabilidad y realizar una verdadera transición democrática. No será fácil. El responsable de las cuestiones electorales de la Minustah lo expresó mediante la siguiente metáfora: «Las elecciones en Haití son como un partido de fútbol en el cual se construye un gran estadio de primera

clase, con una pelota de oro y con un árbitro con un silbato también de oro, pero los jugadores, que son los partidos políticos, salen a la cancha descalzos y en harapos».

Los partidos siguen con sus campañas a pesar de la inseguridad. De los 32 grupos políticos con candidatos a la Presidencia aceptados por el Consejo Electoral Provisional, casi ninguno se ha unido cediendo su candidatura a otra fuerza política. Solo algunos se han fusionado en bloques, pero conservando sus respectivos candidatos. Desgraciadamente, entonces, los partidos aparecen divididos y fragmentados, a pesar de algunas ilusiones de unidad frente a la aparición de la candidatura de René Preval, ex presidente entre 1995 y 2000, definido por Aristide como su «hermano mellizo» y que, según una encuesta de la Embajada de Estados Unidos, obtiene un 32% de las intenciones de voto.

En cuanto a la sociedad civil y a las organizaciones reagrupadas en el seno del Grupo de los 184 (núcleo opositor a Aristide, liderado por el empresario textil André Apaid), hay graves problemas internos. No se logró crear una estructura permanente y representativa, por lo cual parece haberse perdido el poder de movilización, y unos de sus máximos dirigentes, Charles Baker, presentó su candidatura como independiente. En la encuesta ya mencionada, realizada en noviembre de 2004, a la candidatura de Preval le sigue la del demócrata-cristiano Leslie Manigat. En tercer lugar aparece el ex alcalde de Puerto Príncipe, Evens Paul, y, en el cuarto, el socialdemócrata Serge Gilles. Luego, aparecen numerosos grupos de centro, centro-derecha, pro-militares, pro-duvalieristas y lavalasianos pro-Aristide.

En este contexto, las próximas elecciones, si se realizan correctamente, permitirán determinar el peso de cada fuerza política. Si ninguna triunfa en primera vuelta, seguramente será la ocasión para que todos los partidos democráticos se unan y logren generar un poder de transición hacia la institucionalización de la democracia.